LA SEGURIDAD NACIONAL NO HA MUERTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO

El mandato de asesoramiento y la responsabilidad de la conducción



General Oswaldo Moreno

FORO DE EXPERTOS
ASOCID-ECUADOR

Versión en INGLÉS

La Seguridad Nacional NO ha muerto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

El mandato de asesoramiento y la responsabilidad de la conducción

General Oswaldo Moreno
ASOCID-ECUADOR
Quito, 02-NOV-2026



Método Mental Sistémico OSMOV 5D, AAI

Una resurrección doctrinaria en el Día de los Difuntos

En esta conmemoración del Día de los Difuntos, profundamente arraigada en el calendario y la tradición latinoamericana, cuando las familias acuden a los cementerios para recordar a quienes partieron, resulta oportuno detenernos frente a una tumba bastante singular del pensamiento estratégico ecuatoriano.

Allí parece reposar, desde hace varios años, una categoría fundamental de la teoría política, de la estrategia y de la conducción del Estado: **la Seguridad Nacional**.

Curiosamente, no existe partida de defunción. Tampoco una disposición legislativa que haya ordenado su entierro. Mucho menos una derogatoria expresa de las obligaciones institucionales vinculadas con ella. Sin embargo, su presencia en determinados discursos doctrinarios y documentos de planificación ha sido desplazada por concepciones que, aunque necesarias y complementarias, no necesariamente ocupan su mismo lugar dentro de la arquitectura estratégica nacional.

Quizás estamos ante un singular fenómeno: una categoría estratégica que parece haber sido sepultada en la doctrina, pero continúa respirando en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Esta circunstancia invita a una reflexión que trasciende cualquier conmemoración.

El reciente artículo de Jorge Alberto Norero González, titulado *¿Quo vadis, Fuerzas Armadas del Ecuador? Entre la gloria de su historia y la incertidumbre de su futuro estratégico*, plantea interrogantes relevantes sobre la conducción del conflicto interno, los resultados de las operaciones militares, el desgaste de las Fuerzas Armadas y las responsabilidades de quienes dirigen la seguridad del Estado.

Sus cuestionamientos merecen una respuesta razonada.

Desde la perspectiva del **Método Mental Sistémico OSMOV 5D**, examinaremos sus argumentos a través de los niveles de conducción política y estratégica, la relación entre Gobernabilidad, Poder Nacional y Conducción, y las obligaciones expresamente establecidas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

No se pretende negar la importancia de los problemas identificados por Norero ni desmerecer el sacrificio de quienes participan en las operaciones militares. El propósito es identificar dónde se originan las decisiones, cómo deben articularse las responsabilidades y por qué el Estado no puede exigir resultados estratégicos nacionales a quienes cumplen misiones de naturaleza operacional o táctica.

Pero, sobre todo, se pretende demostrar algo que parece haberse olvidado:

La Seguridad Nacional no ha muerto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

El verdadero problema no es solamente militar: es de conducción

El artículo de Norero plantea una pregunta particularmente importante: ¿qué valor estratégico tiene prolongar un conflicto sin objetivos suficientemente claros, sin condiciones de victoria verificables y sin una definición del escenario político e institucional que deberá existir cuando concluyan las operaciones?

Esta interrogante contiene una preocupación válida. Sin embargo, su formulación exige una distinción doctrinaria fundamental.

Las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento del poder nacional, pero no representan la totalidad de ese poder ni son responsables exclusivas de producir las condiciones políticas, económicas, institucionales y sociales necesarias para alcanzar los fines del Estado.

La conducción de la Seguridad Nacional es una responsabilidad superior que requiere la participación articulada de las distintas expresiones del poder nacional.

Desde OSMOV 5D, el análisis comienza con tres ejes fundamentales: **Gobernabilidad (X), Poder Nacional (Y) y Conducción (Z)**.

La Gobernabilidad expresa la capacidad política e institucional para ejercer legítimamente la autoridad, adoptar decisiones y asegurar su cumplimiento.

El Poder Nacional comprende el conjunto de capacidades, recursos e instrumentos que el Estado puede articular para alcanzar sus intereses y objetivos nacionales.

La Conducción representa el proceso político y estratégico mediante el cual esas capacidades se orientan, coordinan y emplean para obtener resultados.

Estas dimensiones son interdependientes, pero no intercambiables.

Un Estado puede disponer de importantes capacidades militares y experimentar, simultáneamente, dificultades de gobernabilidad. También puede contar con recursos suficientes y, sin embargo, carecer de una conducción estratégica capaz de articularlos eficazmente.

Por consiguiente, el éxito de una fuerza militar no puede confundirse automáticamente con el éxito del Estado.

Una fuerza de tarea puede cumplir íntegramente su misión y contribuir a una estrategia operacional sin que ello signifique que las condiciones estructurales del conflicto hayan desaparecido.

Atribuir esa diferencia exclusivamente al desempeño militar equivale a examinar una parte del sistema y pretender que explique la totalidad.

Los cinco niveles de conducción y sus responsabilidades

La doctrina estratégica permite distinguir cinco niveles para ordenar el problema: político o nacional, político-estratégico, estratégico específico, operacional y táctico.

En el **nivel político o nacional** se determinan los intereses y fines superiores del Estado. Su ámbito comprende la preservación de la soberanía, la institucionalidad democrática, la protección de los derechos y las condiciones necesarias para la paz y el desarrollo. Aquí reside la responsabilidad política superior de determinar hacia dónde debe dirigirse la República.

En el **nivel político-estratégico**, esos fines se traducen en políticas, objetivos, prioridades y directrices. Se establece la correspondencia entre lo que el Estado pretende alcanzar y las capacidades nacionales que está dispuesto a comprometer. La cuestión esencial es asegurar que los objetivos sean coherentes con los

medios disponibles y con las condiciones reales del entorno.

En el **nivel estratégico específico** se formulan las estrategias correspondientes a las distintas expresiones y sectores del poder nacional. La Defensa Nacional, la seguridad pública, la política exterior, la economía y las demás áreas competentes deben contribuir, mediante sus propias estrategias, a los objetivos superiores, respetando sus responsabilidades legales.

En el **nivel operacional** se diseña, organiza y conduce el arte operacional cuya función consiste en vincular los resultados de las acciones tácticas con los objetivos establecidos por la estrategia.

Finalmente, en el **nivel táctico** se ejecutan las misiones concretas mediante el empleo de las unidades y capacidades disponibles. Los enfrentamientos, capturas, decomisos, intervenciones y operaciones específicas pertenecen inicialmente a este ámbito.

Estos niveles no constituyen compartimentos aislados. Forman parte de un sistema de conducción en el cual las políticas, objetivos y directrices descienden, mientras los resultados, apreciaciones y recomendaciones ascienden para retroalimentar las decisiones superiores.

La confusión aparece cuando se exigen responsabilidades pertenecientes a un nivel a quienes actúan en otro.

Y esa es una de las cuestiones centrales que debemos examinar al responder al artículo de Norero.

¿Las victorias tácticas producen victorias estratégicas?

Norero sostiene que el Estado puede ganar numerosas operaciones militares y, sin embargo, no alcanzar una victoria estratégica frente a las organizaciones criminales.

El planteamiento es atendible, pero requiere mayor precisión.

Una victoria táctica produce efectos inmediatos en el ámbito de la misión ejecutada. Estos efectos pueden contribuir a un objetivo operacional cuando existe un diseño que permite integrarlos, sincronizarlos y aprovecharlos.

El arte operacional cumple precisamente esa función: transformar acciones y resultados tácticos en efectos organizados que contribuyan a los objetivos de la campaña.

Por ello, una victoria táctica no asciende automáticamente al nivel estratégico.

Su trascendencia dependerá de la contribución efectiva que realice al objetivo operacional y, posteriormente, al objetivo estratégico específico.

La captura de un cabecilla criminal puede representar un éxito táctico relevante. Sin embargo, su repercusión estratégica dependerá de que esa captura afecte sostenidamente las capacidades de organización, financiamiento, reclutamiento y adaptación de la estructura criminal.

De igual manera, la recuperación de un establecimiento penitenciario puede cumplir plenamente su objetivo táctico y contribuir a una campaña de control institucional, sin representar por sí sola la solución del problema penitenciario nacional.

Esto no disminuye el mérito de las unidades participantes.

Simplemente reconoce la naturaleza de sus misiones y la diferencia entre los efectos producidos en cada nivel de conducción.

Excepcionalmente, una acción táctica puede generar consecuencias políticas o estratégicas inmediatas, incluso desproporcionadas respecto de su magnitud militar. La captura de una figura especialmente relevante, la liberación de rehenes o un acontecimiento que modifique decisivamente la percepción pública pueden trascender el ámbito operacional.

Pero esa excepcionalidad no altera la regla general:

> ***Las acciones tácticas adquieren significado estratégico cuando contribuyen materialmente a los objetivos superiores, no solamente porque hayan sido ejecutadas con éxito***.

Tampoco resulta correcto sostener que la acumulación numérica de operaciones victoriosas equivale necesariamente a una victoria estratégica.

La estrategia no es una suma aritmética de acontecimientos tácticos.

Es la articulación de medios, decisiones y acciones para alcanzar fines determinados.

En consecuencia, resulta doctrinariamente indispensable separar la eficacia táctica, la efectividad operacional, el cumplimiento de los objetivos estratégicos específicos y la consecución de los fines políticos nacionales.

> ***No toda victoria táctica constituye una victoria estratégica. Y no todo logro estratégico específico equivale a la consecución de los fines políticos del Estado*.**

La Seguridad Nacional permanece expresamente reconocida en la ley

La discusión adquiere especial trascendencia cuando acudimos a la legislación ecuatoriana.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, publicada originalmente en el Registro Oficial No. 4 del 19 de enero de 2007 y reformada posteriormente, mantiene disposiciones explícitas sobre las responsabilidades políticas y militares relacionadas con la seguridad nacional.

El artículo 3 establece que el Presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y diferencia el ejercicio de sus funciones político-administrativas, mediante el Ministerio de Defensa Nacional, de las militar-estratégicas, desarrolladas con el Comando Conjunto, sin perjuicio de su ejercicio directo.

Esta disposición identifica una separación de funciones que debe comprenderse dentro de la unidad de dirección política del Estado.

El artículo 8 define al Ministerio de Defensa Nacional como órgano político, estratégico y administrativo de la defensa nacional.

Por su parte, el artículo 15 establece al Comando Conjunto como máximo órgano de planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares y de asesoramiento sobre las políticas militares, de guerra y defensa nacional.

Pero existen dos disposiciones que merecen especial atención.

El artículo 16, literal b), encomienda al Comando Conjunto la planificación del empleo de las Fuerzas Armadas para contribuir al mantenimiento de la seguridad nacional.

A su vez, el literal m) del mismo artículo le atribuye la responsabilidad de asesorar al Presidente de la República y al Ministro de Defensa Nacional en las políticas militar y de guerra, así como en el estudio y solución de problemas relacionados con la seguridad nacional.

Finalmente, el artículo 20, literal d), establece entre las obligaciones del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas:

> ***"Informar y asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro de Defensa Nacional, sobre los aspectos relacionados con la seguridad nacional".***

La disposición es inequívoca respecto de la existencia de esa obligación.

El legislador no circunscribió las responsabilidades del Jefe del Comando Conjunto al empleo de tropas o a la conducción de operaciones militares. También estableció un deber de información y asesoramiento que vincula su

competencia profesional con las decisiones superiores del Estado.

La ley utiliza expresamente la expresión seguridad nacional.

No se trata de una interpretación surgida de este ensayo.

Tampoco de una categoría que pretendamos introducir mediante una nueva doctrina.

> ***La Seguridad Nacional permanece reconocida en una ley orgánica vigente y constituye materia expresa de obligaciones institucionales.***

Ahora bien, esta constatación jurídica no significa que una sola disposición legal determine automáticamente toda la arquitectura de la Seguridad Nacional. La ubicación doctrinaria de sus niveles superiores debe fundamentarse en la relación entre la Constitución, las leyes, las competencias institucionales y los principios de la estrategia.

Pero sí permite formular una pregunta que difícilmente puede eludirse:

> ***¿Cómo puede considerarse doctrinariamente superada la Seguridad Nacional si el ordenamiento jurídico continúa atribuyendo responsabilidades específicas de asesoramiento sobre ella?***

Seguridad Nacional y seguridad integral: una distinción necesaria

La Constitución ecuatoriana reconoce la seguridad integral y establece deberes del Estado relacionados con la protección de las personas, los derechos y la convivencia pacífica.

Esta realidad jurídica debe ser reconocida y respetada.

Nuestra objeción no se dirige contra la integralidad de la seguridad ni contra la necesidad de articular las instituciones responsables de garantizarla.

El cuestionamiento es de naturaleza doctrinaria.

La Seguridad Nacional, desde la concepción estratégica que aquí defendemos, constituye el ámbito superior de reflexión y decisión respecto de los intereses, objetivos y condiciones de seguridad del Estado.

La seguridad integral representa un enfoque transversal mediante el cual diferentes instituciones y capacidades contribuyen coordinadamente a esos propósitos.

Una cosa es el nivel desde el cual se establecen los fines y se articulan las políticas superiores. Otra, la integralidad necesaria para ejecutar esas políticas.

La distinción resulta esencial.

En julio de 2026, el Decreto Ejecutivo No. 448 declaró política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029. Este instrumento incluye objetivos, responsabilidades y mecanismos de coordinación que deben ser examinados en el contexto de la planificación estatal.

Sin embargo, el establecimiento de un plan de seguridad integral no elimina las disposiciones legales relacionadas con la Seguridad Nacional ni modifica por sí mismo las competencias que la legislación orgánica atribuye a los órganos de la defensa.

Tampoco puede una política aprobada mediante decreto prevalecer sobre normas de jerarquía superior.

El artículo 425 de la Constitución establece el orden jerárquico de aplicación de las normas y sitúa las leyes orgánicas por encima de los decretos y reglamentos, sin perjuicio de las consideraciones constitucionales sobre competencias y materias.

Por tanto, el debate no consiste en desconocer la vigencia del Plan Nacional de Seguridad Integral ni en sostener que su sola denominación produzca una infracción jurídica.

Consiste en examinar si su arquitectura doctrinaria y su articulación institucional distinguen

adecuadamente entre los fines superiores de Seguridad Nacional, las políticas públicas correspondientes y las estrategias específicas que deben contribuir a su cumplimiento.

La integralidad es indispensable.

Pero la integralidad, por sí sola, no reemplaza los objetivos nacionales, la responsabilidad de la conducción ni la jerarquía de las decisiones.

> ***La Seguridad Nacional debe concebirse integralmente; la seguridad integral no debe confundirse con la totalidad de la conducción estratégica nacional.***

El mandato legal de asesoramiento: una responsabilidad que no puede reducirse a las operaciones

Regresemos a la responsabilidad que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional asigna al Jefe del Comando Conjunto.

Informar y asesorar sobre seguridad nacional exige algo más que comunicar resultados operacionales.

Desde una perspectiva profesional, implica apreciar amenazas, evaluar capacidades, advertir limitaciones del instrumento militar e identificar posibles contradicciones entre los fines políticos y los medios disponibles.

Si una estrategia específica no puede alcanzar los objetivos que le han sido asignados, la autoridad política debe conocer esa situación.

Si la prolongación de determinadas operaciones compromete las capacidades destinadas a la defensa nacional, corresponde evaluar sus consecuencias y formular las recomendaciones pertinentes.

Si los resultados tácticos no están produciendo los efectos operacionales previstos, deben revisarse los supuestos de planificación y las decisiones correspondientes.

Y si existe una inconsistencia entre las políticas superiores y las estrategias específicas sectoriales, esa inconsistencia debe ser examinada dentro de los mecanismos de asesoramiento y coordinación del Estado.

La responsabilidad de asesorar no significa sustituir a la autoridad política.

El Presidente de la República conserva sus competencias constitucionales y responde por las decisiones que le corresponden. El Ministerio de Defensa ejerce las atribuciones propias de su sector. El Comando Conjunto desarrolla sus funciones militar-estratégicas y de asesoramiento conforme a la ley.

Pero la subordinación al poder civil no elimina la responsabilidad de formular criterios profesionales, identificar riesgos y advertir las limitaciones de una decisión.

Por el contrario, el asesoramiento estratégico responsable fortalece la conducción política.

Sería improcedente afirmar, sin conocer los informes, recomendaciones y procedimientos institucionales correspondientes, que una autoridad militar determinada ha incumplido este mandato legal.

No disponemos de esos elementos de prueba.

Lo que sí podemos afirmar es que la obligación existe, y que su cumplimiento plantea una cuestión institucional trascendente.

> ***¿Cómo se materializa actualmente el asesoramiento del Jefe del Comando Conjunto sobre la Seguridad Nacional y qué relación guarda con las políticas superiores y las estrategias específicas de defensa?***

Esta pregunta merece una respuesta doctrinaria e institucional, no una controversia personal.

La dinámica del conflicto: una lectura desde OSMOV 5D

La problemática planteada por Norero también exige comprender que los conflictos

contemporáneos no pueden evaluarse exclusivamente mediante resultados estáticos.

Desde el Método Mental Sistémico OSMOV 5D, la localización de un conflicto en el sistema depende de la relación entre Gobernabilidad, Poder Nacional y Conducción.

En su primera dimensión, el método examina una condición asociada al eje de Gobernabilidad. La segunda incorpora el Poder Nacional y permite estudiar el área de interacción entre ambas dimensiones. La tercera añade la Conducción y construye una representación volumétrica que permite determinar la ubicación espacial del sistema dentro de los ocho octantes del modelo.

La cuarta dimensión incorpora el tiempo, con el propósito de analizar la trayectoria espacio-temporal del conflicto y sus posibles desplazamientos.

Finalmente, la quinta dimensión introduce la percepción humana y los factores RIAH: Riesgo, Incertidumbre, Azar e Historia, que condicionan la interpretación de los acontecimientos y la adopción de decisiones.

La utilidad conceptual de esta arquitectura consiste en recordar que un resultado operacional no debe interpretarse de manera aislada.

Una intervención militar puede producir una modificación favorable de una condición local sin que necesariamente se transforme el estado general del sistema.

La recuperación temporal de un territorio, por ejemplo, puede contribuir al control estatal. Sin embargo, su consolidación dependerá también de la permanencia institucional, de la justicia, de la legitimidad de la autoridad y de la capacidad de impedir la reproducción de las estructuras criminales.

En sentido inverso, una decisión de conducción puede alterar significativamente la trayectoria de un conflicto si logra articular capacidades que anteriormente actuaban de manera fragmentada.

De ahí que la Gobernabilidad, el Poder Nacional y la Conducción no puedan evaluarse como fenómenos independientes.

La cuarta dimensión obliga a considerar la persistencia de los resultados en el tiempo. La quinta recuerda que las decisiones se adoptan bajo condiciones de riesgo, incertidumbre, azar y memoria histórica.

Esta formulación proporciona un marco de investigación que requiere indicadores, contrastación empírica y evaluación continua.

No pretende demostrar matemáticamente, mediante una afirmación teórica, que una estrategia determinada haya fracasado o tenido éxito.

Su contribución es otra: organizar la observación del sistema para examinar las relaciones entre decisiones, capacidades, resultados y evolución del conflicto.

Con ello aparece una interrogante que resulta más amplia que la simple contabilización de operaciones militares:

> ***¿Está el Estado modificando las condiciones que permiten reproducir el conflicto o únicamente interviniendo sobre sus manifestaciones visibles?***

La respuesta no corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas.

Corresponde a la conducción estratégica nacional.

La responsabilidad política no puede trasladarse indefinidamente hacia los escalones inferiores

Uno de los riesgos más importantes de la confusión doctrinaria consiste en desplazar las responsabilidades desde los niveles superiores hacia quienes ejecutan las operaciones.

El comandante de una unidad militar debe responder por la legalidad de sus actuaciones, el cumplimiento de la misión, la disciplina de su

personal y la eficacia de los medios bajo su responsabilidad.

El conductor operacional debe responder por el diseño, la coordinación y los resultados de las operaciones asignadas.

La conducción estratégica específica debe responder por la relación entre los objetivos de su ámbito, las capacidades empleadas y los efectos obtenidos.

Y la conducción política debe responder por la determinación de los fines, la articulación del poder nacional y las decisiones superiores que orientan la actuación del Estado.

Estas responsabilidades no se excluyen, se complementan.

Tampoco implican que los niveles militares superiores queden exentos de evaluar, recomendar o advertir sobre las limitaciones de las decisiones políticas.

El sistema requiere una conducción descendente de objetivos y directrices, acompañada de una retroalimentación ascendente basada en información verificable y asesoramiento profesional.

Cuando esta relación se debilita, aparece una peligrosa distorsión: se pretende que el soldado produzca la paz, que el comandante operacional resuelva las causas sociales del crimen organizado o que las Fuerzas Armadas sustituyan, mediante despliegues sucesivos, las capacidades que otras instituciones del Estado no han conseguido desarrollar.

Ese no puede ser el fundamento de una estrategia nacional coherente.

El esfuerzo militar debe formar parte de un propósito político superior, con objetivos verificables, límites jurídicos, asignación de responsabilidades y mecanismos de evaluación.

La seguridad no se alcanza únicamente mediante la capacidad de combatir, también requiere capacidad de gobernar.

¿Quo vadis, Estado ecuatoriano?

La pregunta formulada por Jorge Alberto Norero González merece permanecer en el debate público.

¿Hacia dónde marchan las Fuerzas Armadas del Ecuador?

Pero esa interrogante conduce necesariamente a otra de mayor alcance:

¿Hacia dónde está conduciendo el Estado ecuatoriano a sus Fuerzas Armadas?

El problema no puede resolverse exclusivamente mediante una evaluación de las operaciones realizadas ni mediante la observación del historial profesional de los comandantes.

Debemos examinar la coherencia de los fines políticos, la calidad del asesoramiento estratégico, la articulación de las capacidades nacionales y la correspondencia entre las estrategias específicas y las misiones operacionales.

Las políticas de Seguridad Nacional deben proporcionar orientaciones superiores a los organismos competentes, para que estos desarrollen sus estrategias sectoriales dentro de sus atribuciones legales.

A su vez, la evaluación de sus resultados debe contribuir a corregir las decisiones superiores cuando la realidad demuestre que los supuestos iniciales han cambiado.

Este proceso exige reconocer la distinción entre dirigir políticamente, asesorar estratégicamente y conducir militarmente.

No se puede confundir la autoridad política con el mando militar.

Tampoco se puede confundir el asesoramiento estratégico con la simple presentación de informes de operaciones.

Y mucho menos se puede confundir una victoria táctica con la consecución de los fines nacionales.

La historia militar proporciona numerosos ejemplos de fuerzas capaces de obtener

resultados importantes en el campo de batalla sin alcanzar los objetivos políticos que justificaron su empleo.

La cuestión esencial no radica únicamente en la capacidad de ejecutar operaciones, sino en la existencia de una conducción capaz de conferirles sentido estratégico.

Por ello, el debate sobre el futuro de las Fuerzas Armadas no debe limitarse a determinar cuánto pueden resistir sus soldados, cuántas misiones pueden cumplir sus unidades o cuántos operativos pueden desarrollar sus comandantes.

Debe examinar, ante todo, qué propósito político orienta ese esfuerzo y cómo contribuye a las condiciones de seguridad, institucionalidad y paz que necesita la República.

Epílogo: una resurrección que no necesita milagros

Regresemos finalmente a la imagen que inspiró estas reflexiones.

En este Día de los Difuntos hemos visitado, metafóricamente, la tumba de la Seguridad Nacional en el pensamiento estratégico ecuatoriano.

Pero al examinar su supuesto certificado de defunción descubrimos una circunstancia verdaderamente singular.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano continúa reconociendo obligaciones expresas relacionadas con ella.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional sigue exigiendo al Comando Conjunto funciones de planificación y asesoramiento sobre seguridad nacional, y a su Jefe la obligación específica de informar y asesorar al Presidente de la República, por conducto del Ministro de Defensa Nacional, sobre los asuntos relacionados con esta materia.

Por consiguiente, **no necesitamos resucitar jurídicamente aquello que no ha muerto**.

Lo que necesitamos es recuperar la claridad doctrinaria que permita comprender su significado, su relación con los intereses nacionales y su articulación con las estrategias específicas.

La seguridad integral tiene un lugar importante en esta arquitectura. Debe contribuir a que las instituciones actúen coordinadamente y a que la seguridad sea concebida desde una perspectiva amplia, compatible con la Constitución, los derechos y las competencias legales.

Pero esa integralidad no puede reemplazar, por simple desplazamiento terminológico, la responsabilidad de establecer los fines superiores ni la necesidad de una conducción estratégica coherente.

La victoria táctica corresponde al resultado de la acción. El logro operacional depende de la articulación de las operaciones. El éxito de la estrategia específica exige alcanzar sus objetivos. Y el éxito político se verifica cuando el Estado consigue los fines nacionales que justifican el empleo de sus capacidades.

Cada nivel tiene una responsabilidad.

Cada autoridad, una competencia.

Cada conductor, una obligación.

Por eso, cuando nos preguntamos hacia dónde marchan las Fuerzas Armadas, no podemos evitar interrogar también a quienes establecen el rumbo político de la República y a quienes tienen el deber legal de asesorarlos.

Las Fuerzas Armadas necesitan misiones claras, objetivos alcanzables, capacidades suficientes y una conducción militar profesional.

El Estado necesita algo más: una concepción de Seguridad Nacional capaz de articular los intereses superiores de la República con las decisiones políticas, las estrategias específicas y las operaciones que deben contribuir a materializarlos.

Porque un país puede ganar incontables operaciones y continuar sin alcanzar sus fines nacionales.

Puede disponer de hombres valientes y carecer de claridad sobre el destino de sus esfuerzos.

Puede tener instrumentos legales de conducción y asesoramiento, y aun así necesitar una revisión profunda de la manera en que esos instrumentos se comprenden y aplican.

La responsabilidad de corregir esas posibles contradicciones no corresponde únicamente al soldado ni al comandante que ejecuta una misión. Corresponde, ante todo, al sistema de conducción del Estado.

Así pues, en esta conmemoración de los difuntos, podemos abandonar tranquilamente el cementerio.

La Seguridad Nacional no necesita flores, epitafios ni ceremonias de resurrección.

Necesita pensamiento estratégico, claridad doctrinaria, cumplimiento de la ley y responsabilidad en la conducción.

Y mientras el Ecuador no consiga articular esos elementos, la pregunta continuará abierta.

No solamente *¿Quo vadis, Fuerzas Armadas del Ecuador?*

Sino, fundamentalmente:

¿Quo vadis, Estado ecuatoriano?

Porque el verdadero problema de una República no es únicamente la incertidumbre sobre su destino.

Es el riesgo de avanzar sin distinguir quién establece el rumbo, quién tiene la obligación de asesorar y quién responde por las decisiones que determinan su porvenir.

Referencias y bibliografía

Fuentes jurídicas y oficiales

Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008, y reformas posteriores. Especialmente artículos 3, 158, 393, 424 y 425.

Congreso Nacional del Ecuador. (2007). *Ley Orgánica de la Defensa Nacional*. Ley No. 2007-74. Registro Oficial No. 4, 19 de enero de 2007. Texto reformado, particularmente artículos 3, 8, 15, 16 y 20.

República del Ecuador. (2023). *Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral*. Suplemento del Registro Oficial No. 279, 29 de marzo de 2023.

Presidencia de la República del Ecuador. (2026). *Decreto Ejecutivo No. 448: Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029*. Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 327, 16 de julio de 2026.

Ministerio de Defensa Nacional. (2026). *Plan Estratégico Institucional de la Defensa 2025-2029*. Resolución Ministerial No. 008, de 27 de enero de 2026.

Referencias estratégicas y doctrinarias

Clausewitz, C. von. (1832/1834). *De la guerra* (*Vom Kriege*). Obra publicada póstumamente.

Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy* (2.ª ed. revisada). Frederick A. Praeger.

Moreno, O. (2024, 22 de julio). *La Ley Orgánica de la Defensa Nacional de Ecuador: ¡Declive de la Seguridad Nacional!*. ASOCID-ECUADOR.

Moreno, O. (2025, 2 de julio). *La Seguridad Nacional. Parte IV*. ASOCID-ECUADOR.

Moreno, O. (2026, 15 de julio). *El Ecuador tiene una nueva política de seguridad: ¿qué*

significa realmente? Una lectura desde la estrategia, la doctrina y el derecho. ASOCID-ECUADOR.

Norero González, J. A. (2026, 3 de noviembre, fecha consignada en el texto proporcionado). *¿Quo vadis, Fuerzas Armadas del Ecuador? Entre la gloria de su historia y la incertidumbre de su futuro estratégico*. Texto atribuido al autor, pendiente de identificación de publicación original.

Marco metodológico

Moreno, O. *Método Mental Sistémico OSMOV 5D*. Arquitectura conceptual de las dimensiones de Gobernabilidad, Poder Nacional, Conducción, tiempo y percepción humana RIAH. Desarrollo doctrinario del autor; referencia editorial definitiva pendiente de incorporación.

osmov@hotmail.com

NATIONAL SECURITY IS NOT DEAD IN ECUADOR'S LEGAL FRAMEWORK

The Mandate to Provide Strategic Advice and the Responsibility of Command



General Oswaldo Moreno

EXPERT FORUM

ASOCID-ECUADOR

National Security has NOT died in Ecuadorian law

The advisory mandate and responsibility for strategic direction

General Oswaldo Moreno
ASOCID-ECUADOR
Quito, November 02, 2026



OSMOV 5D Systemic Mental Method, AAI

A Doctrinal Resurrection on the Day of the Dead

On this commemoration of the Day of the Dead, deeply rooted in the Latin American calendar and tradition, when families visit cemeteries to remember those who have passed away, it is fitting to pause before a rather singular grave in Ecuadorian strategic thought.

There, for several years now, a fundamental category of political theory, strategy, and the direction of the State appears to have lain at rest: National Security.

Curiously, there is no death certificate. Nor is there a legislative provision ordering its burial. Still less is there an express repeal of the institutional obligations associated with it. Nevertheless, in certain doctrinal discourses and planning documents, its presence has been displaced by concepts that, although necessary and complementary, do not necessarily occupy the same place within the national strategic architecture.

Perhaps we are facing a singular phenomenon: a strategic category that seems to have been buried in doctrine, yet continues to breathe within Ecuadorian law.

This circumstance invites reflection that transcends any commemoration.

The recent article by Jorge Alberto Norero González, entitled Quo Vadis, Ecuadorian Armed Forces? Between the Glory of Their History and the Uncertainty of Their Strategic Future, raises relevant questions about the direction of the internal conflict, the results of military operations, the attrition of the Armed Forces, and the responsibilities of those who direct State security.

His questions deserve a reasoned response.

From the perspective of the OSMOV 5D Systemic Mental Method, we will examine his arguments through the levels of political and strategic direction, the relationship among Governance, National Power, and Direction, and the obligations expressly established in the Organic Law of National Defense.

The intention is not to deny the importance of the problems identified by Norero or to diminish the sacrifice of those who participate in military operations. The purpose is to identify where decisions originate, how responsibilities should be coordinated, and why the State cannot demand national strategic results from those who carry out missions of an operational or tactical nature.

Above all, however, the aim is to demonstrate something that appears to have been forgotten:

National Security has not died in Ecuadorian law.

The real problem is not merely military: it is one of direction

Norero's article raises a particularly important question: what strategic value is there in prolonging a conflict without sufficiently clear objectives, without verifiable conditions for victory, and without a definition of the political and institutional scenario that should exist when operations conclude?

This question reflects a valid concern. Its formulation, however, requires a fundamental doctrinal distinction.

The Armed Forces are an instrument of national power, but they do not represent the entirety of that power, nor are they solely responsible for producing the political, economic, institutional, and social conditions necessary to achieve the purposes of the State.

The direction of National Security is a higher responsibility that requires the coordinated participation of the different expressions of national power.

Under OSMOV 5D, the analysis begins with three fundamental axes: Governance (X), National Power (Y), and Direction (Z).

Governance expresses the political and institutional capacity to exercise authority legitimately, make decisions, and ensure their implementation.

National Power encompasses the full set of capabilities, resources, and instruments that the State can coordinate to achieve its national interests and objectives.

Direction represents the political and strategic process through which those capabilities are oriented, coordinated, and employed to obtain results.

These dimensions are interdependent, but they are not interchangeable.

A State may possess significant military capabilities while simultaneously experiencing governance difficulties. It may also have sufficient resources and yet lack strategic direction capable of coordinating them effectively. Consequently, the success of a military force cannot automatically be equated with the success of the State.

A task force may fully accomplish its mission and contribute to an operational strategy without this meaning that the structural conditions of the conflict have disappeared.

Attributing that difference exclusively to military performance is equivalent to examining one part of the system and expecting it to explain the whole.

The five levels of direction and their responsibilities

Strategic doctrine makes it possible to distinguish five levels for organizing the problem: political or national, political-strategic, specific strategic, operational, and tactical.

At the political or national level, the State's higher interests and purposes are determined. Its scope includes the preservation of sovereignty, democratic institutions, the protection of rights, and the conditions necessary for peace and development. This is where the highest political responsibility lies for determining the direction in which the Republic must proceed.

At the political-strategic level, those purposes are translated into policies, objectives, priorities, and directives. A correspondence is established between what the State seeks to achieve and the national capabilities it is willing to commit. The essential issue is to ensure that objectives are consistent with the available means and the actual conditions of the environment.

At the specific strategic level, strategies are formulated for the different expressions and sectors of national power. National Defense, public security, foreign policy, the economy, and the other competent areas must contribute, through their own strategies, to the higher objectives while respecting their legal responsibilities.

At the operational level, operational art is designed, organized, and directed; its function is to connect the results of tactical actions with the objectives established by strategy.

Finally, at the tactical level, specific missions are executed through the employment of available units and capabilities. Engagements, arrests, seizures, interventions, and specific operations initially belong to this sphere.

These levels are not isolated compartments. They form part of a system of direction in which policies, objectives, and directives flow downward, while results, assessments, and recommendations flow upward to inform higher-level decisions.

Confusion arises when responsibilities belonging to one level are demanded of those operating at another.

And that is one of the central issues we must examine in responding to Norero's article.

Do tactical victories produce strategic victories?

Norero argues that the State may win numerous military operations and yet fail to achieve a strategic victory over criminal organizations.

The proposition is reasonable, but it requires greater precision.

A tactical victory produces immediate effects within the scope of the mission carried out. These effects may contribute to an operational objective when a design exists that makes it possible to integrate, synchronize, and exploit them.

Operational art performs precisely that function: transforming tactical actions and results into organized effects that contribute to campaign objectives.

For that reason, a tactical victory does not automatically rise to the strategic level.

Its significance will depend on the effective contribution it makes to the operational objective and, subsequently, to the specific strategic objective.

The capture of a criminal leader may represent a relevant tactical success. Its strategic impact, however, will depend on whether that capture produces a sustained effect on the criminal structure's capacities for organization, financing, recruitment, and adaptation.

Likewise, retaking a prison facility may fully accomplish its tactical objective and contribute to a campaign of institutional control without, by itself, resolving the national prison problem.

This does not diminish the merit of the participating units.

It simply recognizes the nature of their missions and the difference among the effects produced at each level of direction.

Exceptionally, a tactical action may generate immediate political or strategic consequences, even consequences disproportionate to its military scale. The capture of an especially significant figure, the release of hostages, or an event that decisively changes public perception may transcend the operational sphere.

But that exceptional character does not alter the general rule:

> ***Tactical actions acquire strategic meaning when they materially contribute to higher objectives, not merely because they have been successfully executed.***

Nor is it correct to maintain that the numerical accumulation of victorious operations necessarily amounts to strategic victory.

Strategy is not an arithmetic sum of tactical events.

It is the coordination of means, decisions, and actions to achieve defined ends.

Consequently, doctrine must distinguish among tactical efficiency, operational effectiveness, the achievement of specific strategic objectives, and the attainment of national political purposes.

> ***Not every tactical victory constitutes a strategic victory. And not every specific strategic achievement is equivalent to attaining the political purposes of the State.***

National Security remains expressly recognized in law

The discussion acquires particular significance when we turn to Ecuadorian legislation.

The Organic Law of National Defense, originally published in Official Register No. 4 of January 19, 2007, and subsequently amended, retains explicit provisions concerning political and military responsibilities related to national security.

Article 3 establishes that the President of the Republic is the highest authority of the Armed Forces and distinguishes the exercise of the President's political-administrative functions, through the Ministry of National Defense, from military-strategic functions, carried out with the Joint Command, without prejudice to the President's direct exercise of those functions.

This provision identifies a separation of functions that must be understood within the unity of the State's political direction.

Article 8 defines the Ministry of National Defense as the political, strategic, and administrative body of national defense.

Article 15, in turn, establishes the Joint Command as the highest body for the planning, preparation, and strategic direction of military operations and for advising on military, war, and national defense policies.

Two provisions, however, deserve particular attention.

Article 16(b) entrusts the Joint Command with planning the employment of the Armed Forces to contribute to the maintenance of national security.

Subparagraph (m) of the same article assigns it the responsibility of advising the President of the Republic and the Minister of National Defense on military and war policies, as well as on the study and resolution of problems related to national security.

Finally, Article 20(d) establishes, among the obligations of the Chief of the Joint Command of the Armed Forces:

> ***"To inform and advise the President of the Republic, through the Minister of National Defense, on matters related to national security."***

The provision is unequivocal as to the existence of that obligation.

The legislature did not confine the responsibilities of the Chief of the Joint Command to the employment of troops or the direction of military operations. It also established a duty to provide information and advice that links professional competence to the higher decisions of the State.

The law expressly uses the term national security.

This is not an interpretation arising from this essay.

Nor is it a category that we seek to introduce through a new doctrine.

> ***National Security remains recognized in an organic law currently in force and is the express subject of institutional obligations.***

This legal finding does not mean that a single statutory provision automatically determines the entire architecture of National Security. The doctrinal placement of its higher levels must be grounded in the relationship among

the Constitution, the laws, institutional competencies, and the principles of strategy.

It does, however, permit us to pose a question that can hardly be avoided:

> ***How can National Security be regarded as doctrinally superseded when the legal system continues to assign specific advisory responsibilities concerning it?***

National Security and comprehensive security: a necessary distinction

The Ecuadorian Constitution recognizes comprehensive security and establishes State duties related to the protection of persons, rights, and peaceful coexistence.

This legal reality must be recognized and respected.

Our objection is not directed against the comprehensive nature of security or against the need to coordinate the institutions responsible for guaranteeing it.

The question is doctrinal in nature.

National Security, from the strategic conception defended here, constitutes the higher sphere of reflection and decision concerning the State's security interests, objectives, and conditions.

Comprehensive security represents a cross-cutting approach through which different institutions and capabilities contribute in a coordinated manner to those purposes.

One matter is the level at which purposes are established and higher policies are coordinated. Another is the comprehensiveness required to implement those policies.

The distinction is essential.

In July 2026, Executive Decree No. 448 declared the 2025–2029 National Comprehensive Security Plan a public policy of nationwide application. This instrument includes objectives, responsibilities, and coordination mechanisms that must be examined in the context of State planning.

However, the establishment of a comprehensive security plan does not eliminate the legal provisions related to National Security, nor does it, by itself, modify the powers that organic legislation assigns to defense bodies.

Nor can a policy approved by decree prevail over higher-ranking norms.

Article 425 of the Constitution establishes the hierarchical order for the application of norms and places organic laws above decrees and regulations, without prejudice to constitutional considerations regarding powers and subject matter.

The debate, therefore, is not about denying the validity of the National Comprehensive Security Plan or maintaining that its title alone creates a legal violation.

It is about examining whether its doctrinal architecture and institutional coordination adequately distinguish among the higher purposes of National Security, the corresponding public policies, and the specific strategies that must contribute to their fulfillment.

Comprehensiveness is indispensable.

But comprehensiveness, by itself, does not replace national objectives, responsibility for direction, or the hierarchy of decisions.

> ***National Security must be conceived comprehensively; comprehensive security must not be confused with the entirety of national strategic direction.***

The legal mandate to advise: a responsibility that cannot be reduced to operations

Let us return to the responsibility that the Organic Law of National Defense assigns to the Chief of the Joint Command.

Providing information and advice on national security requires more than communicating operational results.

From a professional perspective, it entails assessing threats, evaluating capabilities, warning of the limitations of the military instrument, and identifying possible contradictions between political purposes and available means.

If a specific strategy cannot achieve the objectives assigned to it, the political authority must be informed of that situation.

If the prolongation of certain operations compromises capabilities intended for national defense, their consequences must be evaluated and the relevant recommendations formulated.

If tactical results are not producing the anticipated operational effects, the planning assumptions and corresponding decisions must be reviewed.

And if there is an inconsistency between higher policies and specific sectoral strategies, that inconsistency must be examined within the State's advisory and coordination mechanisms.

The responsibility to advise does not mean replacing the political authority.

The President of the Republic retains the President's constitutional powers and is accountable for the corresponding decisions. The Ministry of Defense exercises the powers of its sector. The Joint Command carries out its military-strategic and advisory functions in accordance with the law.

But subordination to civilian authority does not eliminate the responsibility to formulate professional judgments, identify risks, and warn of the limitations of a decision.

On the contrary, responsible strategic advice strengthens political direction.

It would be improper to assert, without knowing the corresponding reports, recommendations, and institutional procedures, that a particular military authority has failed to comply with this legal mandate.

We do not possess that evidence.

What we can affirm is that the obligation exists and that its fulfillment raises a matter of major institutional significance.

> ***How is the Chief of the Joint Command's advice on National Security currently given practical effect, and how does it relate to higher policies and specific defense strategies?***

This question deserves a doctrinal and institutional response, not a personal controversy.

The dynamics of conflict: an OSMOV 5D reading

The problem raised by Norero also requires an understanding that contemporary conflicts cannot be evaluated exclusively through static results.

Under the OSMOV 5D Systemic Mental Method, the location of a conflict within the system depends on the relationship among Governance, National Power, and Direction.

In its first dimension, the method examines a condition associated with the Governance axis. The second incorporates National Power and makes it possible to study the area of interaction between both dimensions. The third adds Direction and constructs a volumetric representation that makes it possible to determine the system's spatial location within the model's eight octants.

The fourth dimension incorporates time in order to analyze the conflict's spatiotemporal trajectory and its possible shifts.

Finally, the fifth dimension introduces human perception and the RIAH factors: Risk, Uncertainty, Chance, and History, which condition the interpretation of events and decision-making.

The conceptual usefulness of this architecture lies in reminding us that an operational result must not be interpreted in isolation.

A military intervention may produce a favorable change in a local condition without necessarily transforming the general state of the system.

The temporary recovery of a territory, for example, may contribute to State control. Its consolidation, however, will also depend on an enduring institutional presence, justice, the legitimacy of authority, and the capacity to prevent the reproduction of criminal structures.

Conversely, a decision of direction may significantly alter the trajectory of a conflict if it succeeds in coordinating capabilities that previously operated in a fragmented manner.

Hence Governance, National Power, and Direction cannot be evaluated as independent phenomena.

The fourth dimension requires consideration of the persistence of results over time. The fifth reminds us that decisions are made under conditions of risk, uncertainty, chance, and historical memory.

This formulation provides a research framework that requires indicators, empirical testing, and continuous evaluation.

It does not claim to prove mathematically, through a theoretical assertion, that a particular strategy has failed or succeeded.

Its contribution is different: to organize observation of the system in order to examine the relationships among decisions, capabilities, results, and the evolution of the conflict.

This gives rise to a question broader than the simple counting of military operations:

> ***Is the State changing the conditions that allow the conflict to reproduce itself, or is it merely intervening against its visible manifestations?***

The answer is not the exclusive responsibility of the Armed Forces.

It belongs to national strategic direction.

Political responsibility cannot be shifted indefinitely to lower echelons

One of the most important risks of doctrinal confusion is the displacement of responsibilities from higher levels to those who execute operations.

The commander of a military unit must be accountable for the legality of the unit's actions, accomplishment of the mission, discipline of personnel, and effectiveness of the means under the commander's responsibility.

The operational commander must be accountable for the design, coordination, and results of assigned operations.

Specific strategic direction must be accountable for the relationship among the objectives within its sphere, the capabilities employed, and the effects obtained.

And political direction must be accountable for determining purposes, coordinating national power, and making the higher decisions that guide State action.

These responsibilities are not mutually exclusive; they complement one another.

Nor do they imply that senior military levels are exempt from evaluating, recommending, or warning about the limitations of political decisions.

The system requires the downward direction of objectives and directives, accompanied by upward feedback based on verifiable information and professional advice.

When this relationship weakens, a dangerous distortion emerges: the soldier is expected to produce peace, the operational commander to solve the social causes of organized crime, or the Armed Forces, through successive

deployments, to replace capabilities that other State institutions have failed to develop.

That cannot be the foundation of a coherent national strategy.

The military effort must form part of a higher political purpose, with verifiable objectives, legal limits, allocation of responsibilities, and evaluation mechanisms.

Security is not achieved solely through the capacity to fight; it also requires the capacity to govern.

Quo vadis, Ecuadorian State?

The question posed by Jorge Alberto Norero González deserves to remain in public debate.

Where are the Ecuadorian Armed Forces heading?

But that question necessarily leads to another of broader scope:

Where is the Ecuadorian State leading its Armed Forces?

The problem cannot be resolved exclusively by evaluating the operations carried out or by examining the professional records of commanders.

We must examine the coherence of political purposes, the quality of strategic advice, the coordination of national capabilities, and the correspondence between specific strategies and operational missions.

National Security policies must provide higher-level guidance to the competent bodies so that they may develop their sectoral strategies within their legal powers.

In turn, the evaluation of their results must contribute to correcting higher-level decisions when reality demonstrates that the initial assumptions have changed.

This process requires recognition of the distinction among political direction, strategic advice, and military command.

Political authority must not be confused with military command.

Nor can strategic advice be confused with the mere presentation of operational reports.

Still less can a tactical victory be confused with the attainment of national purposes.

Military history provides numerous examples of forces capable of achieving significant battlefield results without attaining the political objectives that justified their employment.

The essential issue lies not only in the capacity to execute operations, but in the existence of direction capable of giving them strategic meaning.

For this reason, the debate over the future of the Armed Forces must not be limited to determining how much their soldiers can endure, how many missions their units can accomplish, or how many operations their commanders can conduct.

Above all, it must examine what political purpose guides that effort and how it contributes to the conditions of security, institutional stability, and peace that the Republic needs.

Epilogue: a resurrection that requires no miracles

Let us return, finally, to the image that inspired these reflections.

On this Day of the Dead, we have metaphorically visited the grave of National Security in Ecuadorian strategic thought.

But when we examined its supposed death certificate, we discovered a truly singular circumstance.

Ecuadorian law continues to recognize express obligations related to it.

The Organic Law of National Defense continues to require the Joint Command to perform planning and advisory functions concerning national security, and it imposes on its Chief the specific obligation to inform and advise

the President of the Republic, through the Minister of National Defense, on matters related to this subject.

Consequently, we do not need to resurrect legally that which has not died.

What we need is to recover the doctrinal clarity necessary to understand its meaning, its relationship to national interests, and its coordination with specific strategies.

Comprehensive security has an important place within this architecture. It must contribute to coordinated institutional action and to a broad conception of security compatible with the Constitution, rights, and legal powers.

But that comprehensive approach cannot, through mere terminological displacement, replace the responsibility to establish higher purposes or the need for coherent strategic direction.

Tactical victory corresponds to the result of an action. Operational achievement depends on the coordination of operations. The success of a specific strategy requires attainment of its objectives. And political success is verified when the State achieves the national purposes that justify the employment of its capabilities.

Each level has a responsibility.

Each authority, a sphere of competence.

Each leader, an obligation.

Therefore, when we ask where the Armed Forces are heading, we cannot avoid also questioning those who set the Republic's political course and those who have the legal duty to advise them.

The Armed Forces need clear missions, achievable objectives, sufficient capabilities, and professional military direction.

The State needs something more: a conception of National Security capable of coordinating the Republic's higher interests with political decisions, specific strategies, and the operations that must contribute to their realization.

For a country may win countless operations and still fail to attain its national purposes.

It may have courageous men and yet lack clarity about the destination of their efforts.

It may possess legal instruments of direction and advice and still require a profound review of how those instruments are understood and applied.

Responsibility for correcting these possible contradictions does not belong solely to the soldier or the commander executing a mission. It belongs, above all, to the State's system of direction.

Thus, on this commemoration of the dead, we may calmly leave the cemetery.

National Security needs neither flowers, epitaphs, nor resurrection ceremonies.

It needs strategic thought, doctrinal clarity, compliance with the law, and responsibility in direction.

And until Ecuador succeeds in coordinating these elements, the question will remain open.

Not only: Quo vadis, Ecuadorian Armed Forces?

But, fundamentally:

Quo vadis, Ecuadorian State?

For the true problem of a Republic is not merely uncertainty about its destination.

It is the risk of moving forward without distinguishing who sets the course, who has the obligation to advise, and who is accountable for the decisions that determine its future.

References and bibliography

Legal and official sources

Constituent Assembly. (2008). Constitution of the Republic of Ecuador. Official Register No. 449, October 20, 2008, and subsequent amendments. See especially Articles 3, 158, 393, 424, and 425.

National Congress of Ecuador. (2007). Organic Law of National Defense. Law No. 2007-74. Official Register No. 4, January 19, 2007. Amended text, particularly Articles 3, 8, 15, 16, and 20.

Republic of Ecuador. (2023). Organic Reform Law Amending Various Legal Bodies to Strengthen Institutional Capabilities and Comprehensive Security. Supplement to Official Register No. 279, March 29, 2023.

Presidency of the Republic of Ecuador. (2026). Executive Decree No. 448: National Comprehensive Security Plan 2025–2029. Fourth Supplement to Official Register No. 327, July 16, 2026.

Ministry of National Defense. (2026). Institutional Strategic Plan for Defense 2025–2029. Ministerial Resolution No. 008, January 27, 2026.

Strategic and doctrinal references

Clausewitz, C. von. (1832/1834). On War (Vom Kriege). Work published posthumously.

Liddell Hart, B. H. (1967). Strategy (2nd rev. ed.). Frederick A. Praeger.

Moreno, O. (2024, July 22). Ecuador's Organic Law of National Defense: The Decline of National Security! ASOCID-ECUADOR.

Moreno, O. (2025, July 2). National Security. Part IV. ASOCID-ECUADOR.

Moreno, O. (2026, July 15). Ecuador Has a New Security Policy: What Does It Really Mean? A Reading from Strategy, Doctrine, and Law. ASOCID-ECUADOR.

Norero González, J. A. (2026, November 3, date stated in the text provided). Quo Vadis, Ecuadorian Armed Forces? Between the Glory of Their History and the Uncertainty of Their Strategic Future. Text attributed to the author; identification of the original publication remains pending.

Methodological framework

Moreno, O. OSMOV 5D Systemic Mental Method. Conceptual architecture of the dimensions of Governance, National Power, Direction, time, and RIAH human perception. Doctrinal development by the author; definitive editorial reference pending incorporation.

osmov@hotmail.com